

INTELECTUALES Y EXPERTOS: “VIOLENTÓLOGOS” Y ECONOMISTAS EN LA PRODUCCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS EN COLOMBIA

INTELLECTUALS AND EXPERTS: “VIOLENTOLOGISTS” AND ECONOMISTS IN THE PRODUCTION OF SOCIAL AND ECONOMIC POLICIES IN COLOMBIA

Laura Catalina Cartagena Núñez¹
catacartagena.un@gmail.com

Fecha de recepción: 21 mayo 2012 - Fecha de aceptación: 5 noviembre 2012

Resumen

En este artículo, proponemos desarrollar una aproximación histórica y contextual a la hipótesis de que el intelectual en Colombia se consolida como un nuevo actor político productor de políticas sociales y económicas hacia finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa. Desde esta perspectiva, tomaremos como punto de partida la consolidación de lo que se ha denominado “violentología” como campo de conocimiento y la articulación de un grupo de intelectuales/expertos quienes producen políticas sociales, particularmente enfocadas en torno al tema de la violencia. Luego, consideraremos el proceso de la élite intelectual productora de políticas económicas en el contexto de emergencia del neoliberalismo. Teniendo en cuenta la especificidad de cada desarrollo, asumimos que ambas dinámicas se inscriben en un proceso más general que se caracteriza por la tendencia a la especialización técnica y/o experta de los conocimientos sobre lo social y lo económico.

Palabras clave: *Violentología, intelectuales, expertos, élite intelectual, política económica, política social, conocimiento.*

Abstract

In this article, we propose to develop a historical and contextual approach to the hypothesis that intellectuals in Colombia started being recognized as new political actors and producers of social and economic policies, around the late 80s and early 90s. From this perspective, we will take as starting point the consolidation of the so-called ‘violentology’ conceived as a field of knowledge, and the articulation of a group of experts/intellectuals producing social policies particularly focused on the topic of violence. Later, we will consider the process of the intellectual elite producing economic policies in the context of the emergence of neoliberalism. Taking into account the specificity of each development, we assume that both dynamics are circumscribed within a more general process characterized by its tendency towards technical and/or expert specialization of social and economic knowledge.

Key words: *Violentology, intellectuals, experts, intellectual elite, economic policies, social policies, knowledge.*

Introducción

En este artículo trabajamos con la hipótesis de que a partir de las décadas de los ochenta y noventa en Colombia, se gestan unas condiciones específicas que van a permitir la consolidación de un grupo de intelectuales -científicos sociales y economistas, especialmente- como un nuevo actor político y su intervención concreta en la producción de políticas sociales y económicas. Desde este supuesto consideramos, por un lado, la producción de políticas sociales enmarcadas particularmente en torno al problema de la violencia y como resultado de la gesta de un proceso de paz, que moviliza y actúa sobre un grupo de intelectuales especialistas en el tema. Por el otro, asumimos la producción de políticas económicas por parte de una élite intelectual de economistas técnicos y especializados de corte neoliberal, que si bien constituye un proceso de larga duración que tiene lugar desde los años sesenta, logra consolidar el proyecto del modelo económico solo a partir de la década de los noventa. Desde esta perspectiva ubicamos a los intelectuales como fuerzas productivas, generadoras de políticas sociales y económicas, y planteamos dos puntos claves de reflexión transversales a todo el artículo: a) la discusión en torno al intelectual crítico y pensante o al intelectual experto y funcionario público burocrático, y b) la tendencia a la especialización técnica y/o experta de los conocimientos sobre lo social y lo económico.

Antecedentes

En un marco general, las relaciones entre intelectuales y política en Colombia se han abordado desde perspectivas particulares. Una de estas es la social, que incluye las disciplinas históricas, sociológicas y antropológicas principalmente. En esta perspectiva los trabajos se han dedicado en buena medida a caracterizar el rol político de los intelectuales en una dimensión histórica y política. Uno de los aportes más significativos, para nuestro caso específico, es la constitución de una tipología del intelectual para periodos relativos a lo largo del siglo XX (Sánchez, 1998; Villaveces, 1998; Urrego, 2002; Loaiza, 2004). Para el periodo particular que

nos interesa y que inicia en los años ochenta, los intelectuales dominantes son considerados desde variados puntos de vista. Están los “intelectuales para la democracia” en el contexto de un “Nuevo Pacto cultural”; el de “los Intelectuales con el Estado” (Sánchez, 1998: 115) que supone un replanteo de las relaciones entre la insurgencia y el Estado en el marco del proceso de paz; el de “los economista neoliberales” (Urrego, 2002) que hace alusión al periodo reconocido por el historiador Miguel Ángel Urrego como “La cooptación de los intelectuales disidentes” y que implica un cambio en el campo intelectual y un mayor control por parte del Estado. Sobre este último, Urrego indica cómo la incorporación de los intelectuales al Estado se produce a través de la ruptura con la concepción de la violencia y la política de paz desarrollada por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Por su parte, el sociólogo e historiador Gilberto Loaiza (2004) reconoce a los “intelectuales subordinados”, aquellos que le sirven al Estado, a las instituciones, a los grupos sociales y económicos dominantes, reproduciendo y administrando sus pautas de control. Finalmente, el antropólogo Santiago Villaveces (1998) rescata también una tipología de los intelectuales, centrándose específicamente en aquellos vinculados al IEPRI (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia) al asumir el predominio del “intelectual burocratizado” con mentalidad de funcionario público, cuyo objetivo es lograr que su discurso sea ejecutable políticamente.

Una segunda perspectiva, la de la economía política, analiza más puntualmente la conformación de una élite intelectual -de economistas-, vinculada especialmente al poder político y su práctica. Esta reconoce la particularidad que se da en el tránsito de la figura del intelectual desde el abogado hasta el economista (Palacios, 1995, 2001). La literatura al respecto aporta en la contextualización de la función y el rol político del sector intelectual al particularizar en el ejercicio político de los economistas para el periodo neoliberal. En este ámbito son relevantes los trabajos de Rafael Echeverry (1994) y Jesús Antonio Bejarano (1999) sobre la organización social e institucional de la economía en Colombia, y los trabajos de Oscar Marulanda (1999)

sobre los sectores de tecnocracia y la producción de políticas económicas. La hipótesis fuerte de esta perspectiva apunta al surgimiento de un sector tecnócrata conformado en su mayoría por economistas formados en las universidades norteamericanas más prestigiosas, y que comparten rasgos y características particulares. En este marco, se propone la categoría analítica de “élite intelectual” como referente para aproximarse a esta problemática desde una concepción que la reconoce -a la élite- como un conjunto de sujetos políticos encargado de la producción de la política económica en Colombia (Estrada, 2005). Además de estos desarrollos, son relevantes aquellos trabajos que complementan esta perspectiva dedicados a analizar los discursos y narrativas de la “élite intelectual” (Aristizabal, Cubides y Jiménez, 2005).

Finalmente, una tercera perspectiva que se deriva de los avances de la economía política, hace referencia al campo jurídico, en la cual los estudios han invocado la categoría analítica de “élite jurídica” para dar cuenta del proceso de conformación de los sujetos políticos que orientan el ámbito de la justicia en Colombia (Ortiz, Iván David, 2005)

Este panorama permite retomar la discusión sobre la relación entre intelectuales y expertos. Sobre este punto es relevante tener en cuenta el trabajo de Mariano Plotkin y Federico Neiburg (2004) para una precisión de tipo analítico y conceptual. En la tensión “intelectual-experto”, los autores reconocen la generalización de un uso mecánico de categorías de análisis que suelen confundirse o mezclarse con categorías de identificación. A través de estudios empíricos y de casos particulares en Argentina, el trabajo muestra cómo las figuras de intelectuales y expertos:

Lejos de marcar puntos extremos de una línea, constituyen un espacio de intersección productiva, y cómo es precisamente dentro de ese espacio (definido por el Estado, el mundo de la academia, el mundo de los negocios y lo que se ha dado en llamar “el campo intelectual”) donde se produce el conocimiento sobre la sociedad (Plotkin y Neiburg, 2004:17).

Para el caso colombiano, el historiador Gonzalo Sánchez (1998) opina que las relaciones que se generan entre intelectuales-universidad-Estado para los años ochenta, escapan del dilema:

“intelectual crítico, versus panegirista o consejero del príncipe” (de ahí que opte) más bien por un concepto abierto como el de Intelectuales para la democracia, o de “intelectuales ciudadanos”, como diría Chomsky, (ligados ya sea al Estado, a la política o a los movimientos sociales) que piensan que la actividad de diagnóstico de un programa o gestión gubernamental, e incluso la vinculación a una función pública, no presupone la renuncia a una posición contestataria” (p. 116).

No obstante, contradiciendo esta postura, Villaveces (1998) afirma un desbalance entre crítica y experticia en los intelectuales colombianos, lo que genera una gran preocupación para la autonomía del campo intelectual. El autor supone que la absorción incremental de los intelectuales hacia culturas de experticia ha contribuido a borrar las ya difusas fronteras entre el Estado y la academia: “El intelectual va cayendo en esa óptica de administrador público (...) tiene la obligación de ser optimista frente a los que está haciendo en el gobierno porque no puede ser un crítico del gobierno con el cual está trabajando, ni un crítico de sí mismo (...)”.

En esta medida, aparece como recurrente la imposibilidad de sostener el balance entre el criticismo y la experticia.

“Violentólogos”: La producción de conocimiento y políticas sociales sobre la violencia

En Colombia, a partir de la década de los ochenta, se produce una ruptura substancial en la concepción de la violencia, en la manera de abordarla como fenómeno social y proponer soluciones. La nueva concepción subraya el fenómeno como efecto de problemas concretos y estructurales, con lo cual explica y reconoce tanto la existencia de un conflicto interno armado, así como la presencia de grupos insurgentes en tanto actores que configuran el escenario nacional. En este contexto y bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) emergen nuevas estrategias políticas para la resolución del conflicto plasmadas en la propuesta a largo alcance de un “proceso de paz”, con el cual y a través de comisiones especializadas se alcanzaría una salida dialogada y negociada.

Los sectores dominantes vieron como el presidente Belisario Betancur, a partir de 1982, iniciaba un cambio en el discurso sobre la paz y la violencia, formulando el argumento de las causas objetivas de la violencia en Colombia que explicarían la existencia de la subversión, y estableciendo una serie de contactos directos con los grupos insurgentes, a los que de paso les reconoció su beligerancia (Urrego, 2002: 230).

Esta postura formaliza un choque dentro de los sectores políticos tradicionales, los cuales deciden replantear sus diferentes opciones para dar salida al problema de orden público. Tal replanteamiento termina promoviendo la búsqueda de legitimidad del proyecto político en el sector intelectual, concediendo así valor inmediato a su saber especializado sobre la realidad social.

En medio de este panorama y bajo la demanda gubernamental de estudios calificados sobre la violencia se consagra un saber particular: la “violentología”, consolidada por el ejercicio de científicos sociales especialistas provenientes de disciplinas como la historia, la sociología y la antropología principalmente, y se conforma un grupo de intelectuales/expertos llamados “violentólogos” concentrados en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI). Dichos especialistas son autorizados y avalados por el gobierno para elaborar diversos informes académicos en los que además de conceptualizar y definir lo que es la violencia, diagnostican, recomiendan e intervienen respecto a esta. En esta medida, los intelectuales asumen la función de especialistas en la interpretación del fenómeno y se convierten en artífices de la definición de una nueva política sobre el orden público y la paz.

De esta forma, el proceso que inicia en 1982 y que alcanza su consolidación en 1991 con la Asamblea Constituyente se caracteriza por la emergencia de un grupo de especialistas en el tema de la violencia, bajo el contexto de la demanda gubernamental de un proyecto político de paz. El proceso, además, aporta una estructura institucional específica para los intelectuales, las consejerías de paz y la creación de figuras de asesores y comisionados, en virtud de la posesión de saberes especiales que, se supone, orientan adecuadamente el proyecto. En ese sentido, los intelectuales son llamados para establecer los diálogos, acuerdos de paz y la reincorporación

a la vida civil de los grupos insurgentes. En esta misma línea, los intelectuales son convocados para desempeñar distintos cargos importantes, inicialmente en los ministerios como el Ministerio de Defensa en 1988 o el Ministerio de Cultura creado en 1997 bajo el gobierno de Ernesto Samper, la rectoría de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia o el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Al mismo tiempo, se produce una demanda a gran escala de estudios explicativos sobre los fenómenos de la violencia, estudios generales y regionales, que son fomentados y financiados directamente por el Estado o a través de instituciones como Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación).

Por otra parte, en el marco específico de las políticas de paz, los informes de las comisiones académicas sobre la violencia son tomados en cuenta y se incorporan en el diseño de planes gubernamentales. Un ejemplo es el primer informe, “*Colombia: Violencia y Democracia*” (1987), del cual se deriva, por un lado, la nueva política social del gobierno de Virgilio Barco (denominado “Plan Nacional de Reconciliación”) y, por otro, la política pública de paz del Gobierno de Cesar Gaviria (“Revolución Pacífica”), la cual derivó en la “Estrategia Nacional Contra la Violencia”. Estos procesos influyeron en buena medida en la creación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual procuró la participación de una diversidad de grupos sociales y políticos que repensaron las estructuras del Estado y elaboraron la nueva constitución para el país. Del segundo informe, “*Comisión de Superación de la Violencia: Pacificar la Paz*” (1992), se asumen también varias recomendaciones que proceden de la estrategia denominada “Paz Integral y el diálogo útil” del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), aquí se produce el nombramiento de un Alto Comisionado para la Paz, al cual se le asignan las tareas circunscritas a la desmovilización de los grupos guerrilleros y a la reinserción de sus combatientes; se impulsa la humanización de la guerra, mediante el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y se enfatiza en las comisiones facilitadoras de carácter regional.

Si bien las relaciones entre las recomendaciones de los informes académicos y su implementación en el diseño de políticas públicas de paz tienen relevancia particular en el tema que aquí desarrollamos, estas requieren de un análisis más extenso y detallado que excede el objetivo del presente trabajo, de ahí que los ejemplos sean presentados de modo indicativo.

En resumen, los “violentólogos” aparecen como resultado de varios factores, entre los más notables, la especialización del conocimiento sobre la violencia, la demanda gubernamental de servicios profesionales y estudios expertos financiados por el Estado y la concentración de los intelectuales en una institución avalada y creada por la universidad pública. En ese panorama, la consolidación de la “violentología” y los “violentólogos” se convierte en pieza clave para el proceso de construcción de nociones sobre la violencia y la paz, que más adelante van a incidir en la definición de planes gubernamentales de desarrollo y políticas sociales. Esas nociones empiezan a reconocer, por un lado, las causas estructurales del conflicto y, por el otro, una multiplicidad de expresiones de la violencia que sobrepasan la ya conocida dimensión política. La violencia, entonces, comienza a asociarse con factores socioeconómicos, socioculturales o de lucha por posesión territorial. Se invoca además una profundización de la democracia y una extensión de la civilidad como principales antídotos para la guerra.

Economistas: Conformación de la élite intelectual y la producción de política económica

En una aproximación al estudio de la relación entre élites intelectuales y la producción de políticas económicas, es pertinente señalar tanto el uso de la noción “élite intelectual” como del concepto de “producción de política económica”. En ambos casos adherimos a la postulación del historiador y economista Jairo Estrada Álvarez (2005). En términos generales, la noción de “élite intelectual” supone una transformación de la condición y la función intelectual en el contexto de las nuevas disposiciones del modelo capitalista. Específicamente, aquí ubicamos la noción, delimitada:

Al estudio del campo intelectual en tanto campo de la actividad política económica y –de manera específica– al examen de una de las fuerzas productivas de la actividad política. (...) La noción de élite adquiere relevancia en el sentido de la reafirmación de las nuevas formas de apropiación privada de la producción política, de su carácter excluyente, selectivo de sus formas de comunicación y socialización- (p. 260).

Al mismo tiempo, la ubicamos en el proceso de construcción de la hegemonía de proyectos político económicos inspirados en la teoría neoclásica y el neoliberalismo, lo cual supone una incidencia sobre la definición de los aspectos básicos del poder y una incursión en el aparato estatal. Sobre esto último hacemos referencia específica a la incursión de la élite intelectual de la producción de política económica, en los ministerios de hacienda y bancas centrales, así como universidades, centros de investigación y de consultoría, partidos políticos, las ONG, entre otros.

Por otro lado, advertimos que cuando hablamos de políticas económicas lo hacemos en los términos de las políticas de ordenación y de las políticas de proceso, denominadas por la jerga neoliberal como políticas de reforma y de ajuste estructural. Es decir que nos referimos a aquellas gestiones orientadas a instaurar o transformar el marco de la economía general (políticas de reforma estructural) y a aquellas gestiones orientadas a solucionar problemáticas o desequilibrios específicos procedidos del proceso económico particular (políticas de ajuste estructural) (Estrada, 2005).

Dicho esto, entraremos a considerar la consolidación de la élite económica en tanto resultado de un proceso histórico que ha atravesado etapas particulares; para esto, abrazamos aspectos claves de la caracterización aportada por Estrada (2005).

La primera etapa de “constitución” (1966-1984) se caracteriza por la emergencia social de la élite intelectual en el contexto de las demandas del proyecto político-económico, lo que genera una creciente apropiación social sobre el conocimiento y la técnica económica. También, se caracteriza por la incorporación de la élite en la conducción de la política de Estado y del proceso económico. En este contexto, la élite intelectual resulta ser el producto de varios factores, la profesionalización de la economía y la formación

académica en posgrados (maestrías y doctorados) de calidad en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos; la incorporación de la élite al aparato estatal en función de técnicos expertos y la creación de centros especialistas en el diseño de políticas económicas como el caso de Fedesarrollo (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo). Influye de la misma manera, el creciente flujo de publicaciones especializadas en análisis económico y la divulgación y circulación de saberes especializados a partir de congresos y seminarios, auspiciados y financiados en muchos casos por sectores empresariales o instituciones internacionales.

En la experiencia colombiana, la élite intelectual emerge como un complemento de la “política tradicional” y precisamente depende de su relación con este sector para proyectarse y posicionarse. Irrumpe, además, en el contexto de la nueva era del capital donde las fuerzas se recomponen y ocurren cambios significativos en la esfera del poder y la dominación, el surgimiento de nuevos monopolios de grupos económicos, las prácticas clientelistas y corruptas y el ascenso del narcotráfico a la economía y la política, entre otros aspectos.

La segunda etapa, de estabilización y consolidación (1985-1990) se caracteriza por la inserción del contexto colombiano a la lógica de acumulación transnacional; es decir, el diseño e implantación de políticas se relacionan con el estado de crisis financiera internacional que supone la imposición de medidas de estabilización macroeconómicas, que permitan el “normal” funcionamiento del sistema. En este pasaje, el papel desempeñado por la élite intelectual es de gran importancia para la construcción de un consenso con el bloque dominante de poder, en torno a la apertura de la economía local a los mercados internacionales, pues sienta las bases teóricas y prácticas para la redefinición estratégica del modelo económico, fundamentada sobre todo en discusiones de carácter técnico. De esta forma, el proyecto neoliberal queda concretado en el “Plan de modernización de la economía colombiana” (1990), el cual presupone que la estabilidad de la macroeconomía se constituye en una condición clave y fundamental para realizar lo que en adelante se llamarían reformas estructurales. No

nos detendremos en las facciones y campos de discusión de la élite intelectual sobre el “modelo económico” en tanto es un tema que desborda el propósito de éste artículo. Basta con decir que la línea “ortodoxa”, de influencia neoclásica y neoliberal, logró imponer una secuencia de políticas que se venían aplicando en la mayoría de países de América Latina, relacionada claramente con el proyecto del Fondo Monetario Internacional.

Al mismo tiempo y paralelo a este proceso, la élite intelectual comenzó a ocupar altos cargos en instituciones gubernamentales de la economía, de la mano de un debilitamiento de la política tradicional -como resultado de la tecnificación- aún cuando esto no implicó su total desplazamiento. Sumado a esto, se estrecharon los vínculos con los organismos multilaterales, con lo que se define una dimensión transnacional de la élite intelectual y un fuerte y amplio desarrollo del campo de la consultoría y la asesoría.

La tercera y última etapa, de expansión y profundización (1990-hasta la actualidad) se caracteriza por su concentración en el proyecto político de transformación neoliberal de la sociedad. Durante este periodo, se implantan e institucionalizan las políticas de ajuste y reforma estructural. Si bien las reformas del Gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) aparecen como respuesta a las demandas de la dinámica interna del capitalismo local, estas coinciden de buena manera con la agenda de reformas propuestas por el Consenso de Washington. Bajo el lema: “apertura económica y modernización del Estado” las reformas de Gaviria consolidan el enfoque teórico y práctico del neoliberalismo. Sin embargo, lo más llamativo de este proceso es la definición de un nuevo marco jurídico institucional que avala la consolidación y funcionamiento del nuevo modelo económico neoliberal. En este contexto, la regulación jurídica de la nueva economía está acompañada de un proceso político de mayor alcance cuyo análisis desborda los propósitos de este trabajo; sin embargo, es preciso anotar que la producción de la nueva Constitución Política de 1991 consagró las condiciones institucionales para el afianzamiento del proyecto político económico. Aún cuando la Asamblea Nacional Constituyente buscaba fundamentalmente, una salida negociada a los evidentes signos de crisis

estructural del régimen político y dar curso a los acuerdos de negociación con sectores de la insurgencia armada (Movimiento 19 de Abril, M-19, y Ejército Popular de Liberación, EPL, principalmente), que le habían apostado a una reincorporación a la vida civil, también presentó avances importantes en la constitucionalización de derechos económicos y sociales.

Resumiendo, al considerar el proceso de conformación de la élite intelectual de la producción de política económica en una aproximación general, podemos afirmar que durante el periodo específico 1982-1991 en Colombia, la élite intelectual se consolidó, expandió y profundizó, quedando la conducción política de los asuntos económicos, fundamentalmente a su cargo. Si bien pueden reconocerse discusiones y posicionamientos de las diferentes facciones dentro de ésta, es claro el impulso e imposición de la línea ortodoxa. De ahí su cercanía con las postulaciones de la teoría económica neoclásica y neoliberal y su papel central en la definición del modelo económico, a través del diseño e institución de reformas estructurales que quedarían consagradas en la Carta Política de 1991. Al mismo tiempo, su configuración en forma de red le permite consolidar y ampliar los campos de producción política. Al respecto, anota Estrada (2005):

La configuración en forma de red le ha permitido articular, circular y proyectar en diversos ámbitos su presencia, así como actuar en la forma de “intelectual colectivo” en el Estado, los organismos multilaterales, las empresas multinacionales, los grupos económicos, las empresas propias, los gremios económicos, los medios de comunicación, el sector académico y los centros de investigación (p. 314).

A modo de conclusión

Es posible acercarnos al proceso de constitución y desarrollo de la élite intelectual de producción de política económica, dar cuenta de su proceso histórico de consolidación a través de etapas delimitadas y reconocer las características particulares que definen al intelectual de la economía para cada periodo, en tanto es un fenómeno abordado y estudiado con lupa por investigadores de la economía y las ciencias sociales para el caso colombiano y latinoamericano. No obstante, para

el fenómeno de los “violentólogos”, especialistas en la violencia, la aproximación sistemática y la delimitación por periodos se torna más difícil. Podríamos arriesgarnos y señalar que la razón de la dificultad está dada por la reciente consolidación de la “violentología” y su precaria inclusión dentro del panorama de las ciencias sociales en Colombia. Sin embargo, teniendo en cuenta esta limitación, podemos hacer algunas observaciones indicativas respecto de ciertas relaciones y puntos coincidentes a ambos fenómenos.

En primer lugar, podemos considerar que la transformación de los intelectuales para la década de los ochenta y su consolidación como actor político se debe a la confluencia de varios factores. 1. La ruptura con la concepción anterior del conflicto interno y su tratamiento. La nueva noción señala la existencia de causas objetivas y llama a los intelectuales para legitimar las propuestas de paz. En este contexto, se establecen los diálogos de paz y la reincorporación de los grupos insurgentes en los que los intelectuales son convocados por el Estado para constituir las diferentes comisiones asesoras y, al mismo tiempo, les solicita estudios explicativos sobre el fenómeno de la violencia. 2. Los intelectuales comienzan a incorporarse al aparato estatal a través de la ocupación de cargos públicos. 3. Hay un proceso de fortalecimiento de las corrientes neoconservadoras en la política y el pensamiento. 4. La emergencia del neoliberalismo y sus consecuentes reformas requieren de un proyecto de legitimación y de la presencia de un nuevo tipo de funcionario que se caracteriza por una alta cualificación y eficiencia.

En segundo lugar, este fenómeno supone una reflexión sobre el ámbito más general de los modos de intervención política de los intelectuales. Si bien las condiciones históricas y sociales determinan en buena medida la intervención del intelectual, su situación asume frecuentemente la forma de dilema entre un tipo de colaboración institucional o intelectual con la gestión gubernamental y la modalidad de participación que se le pide, dando por supuesta su autonomía y su independencia crítica para identificar lo posible. En tercer lugar, la diversidad de ámbitos en los que el intelectual se sitúa, ya sea en el espacio de lo social o de lo económico, le permite configurar

su rol multifacético; de este modo, lo podemos encontrar como funcionario político, tecnócrata, consultor, asesor, empresario, académico o investigador.

Finalmente, consideramos que los intelectuales/expertos, tanto del ámbito económico como del ámbito social, son algo más que un grupo distinguido de individuos poseedores de habilidades o capacidades particulares, a quienes se les otorga un lugar en el monopolio sobre el conocimiento de la violencia o la época capitalista. Los ubicamos, específicamente, como fuerzas productivas, generadoras de políticas sociales y económicas que intervienen en los procesos fundamentales que definen los cursos de un país. En este sentido, el intelectual deviene funcionario y el pensamiento crítico en razón burocrática.

Referencias bibliográficas

- Aristizabal Diana; Cubides Juliana y Jiménez, Carolina (2005). "Discursos y narrativas de las reformas estructurales en la élite intelectual colombiana". P. 321-346. En Estrada, Jairo. *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. .
- Bejarano, Jesús Antonio (1999) *Hacia dónde va la ciencia económica en Colombia. Siete ensayos exploratorios*. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Colciencias, Tercer Mundo editores.
- Echeverry, Rafael (1994) *El desarrollo del conocimiento económico y su institucionalización desde el Frente Nacional hasta nuestros días*. Bogotá. Misión CED.
- Estrada, Jairo (2006) "Élites intelectuales y producción de política económica en Colombia". P. 259-320. En Estrada, Jairo. *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.
- Estrada, Jairo y Puello, José Francisco (2006). "Elites, Intelectuales y Tecnocracia". Rev. Colombia Internacional. 62 (1) 100-119. Bogotá. Universidad de los Andes.
- Loaiza Cano, Gilberto (2004). Los intelectuales y la historia política en Colombia. P. 56-94. En César Augusto Ayala Diago. *La historia política hoy. Sus métodos y las Ciencias Sociales*. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.
- Marulanda Gómez, Oscar (1999) *Economía política del manejo macroeconómico en Colombia. Un primer recorrido de memoria*. Bogotá. Colección de Estudios de Economía. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Ortiz Palacios, Iván David (2005) "Élites jurídicas, justicia laboral y política neoliberal". En Estrada, Jairo: -*Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*" Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.
- Palacios, Marco (2001) "Saber es poder. El caso de los economistas colombianos". En *De populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder*. Bogotá. Colección: Grandes Temas, Editorial Planeta.
- Palacios, Marco (2000) "La solución política al conflicto armado 1982-1997". P.345-401 En Camacho, Álvaro y Leal, Francisco. *"Armar la paz es desarmar la guerra"* Bogotá. Cerec.
- Plotkin, Mariano y Neiburg, Federico. (2004) *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en Argentina*. Buenos Aires. Paidós.
- Sánchez, Gonzalo (1993) "Los intelectuales y la violencia". Rev. *Análisis Político*. N. 19. P. 40-50.
- Sánchez, Gonzalo (1998) "Intelectuales, poder y cultura nacional". Rev. *Análisis Político*. N. 34. P. 99-119.
- Urrego, Miguel Ángel (2002). *Intelectuales, estado y nación en Colombia: de la guerra de los mil días a la constitución de 1991*. Bogotá. Universidad Central -DIUC-, Siglo del hombre editores.
- Villaveces, Santiago (1998) "Entre pliegues de ruinas y esperanzas. Viñetas sobre los estudios de la violencia en el IEPRI". Rev. *Análisis Político*. N. 34. 80-98.